

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	CONQUIMICA S.A.S
DEMANDADOS	ASEKIM INDUSTRIA QUÍMICA S.A.S.
ACTUACIÓN	CONFLICTO DE COMPETENCIA
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI
RADICADO	05001 22 03 000 2023 00613 00 INTERNO 2023-058
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 188
DECISIÓN	DETERMINA COMPETENCIA EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN POR EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DEMANDADA

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Se dirime por el presente proveído, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI, respecto de la demanda ejecutiva promovida por CONQUIMICA S.A.S. en contra de ASEKIM INDUSTRIA QUÍMICA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial la sociedad CONQUIMICA S.A.S., promovió demanda ejecutiva, pretendiendo se librara mandamiento de pago en su favor y en contra de ASEKIM INDUSTRIA QUÍMICA S.A.S., por la deuda contenida en los títulos valores – facturas arrimados como base de recaudo.

El escrito introductor fue dirigido al juez civil municipal de Medellín, correspondiendo por reparto al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, autoridad judicial que mediante auto del 6 de junio de 2023, decidió rechazar la demanda por falta de competencia, con sustento en que el domicilio la sociedad ejecutante es el Municipio de Itagüi y en los títulos valores no se

estableció lugar para el pago, decidiendo entonces remitir el expediente a reparto de los juzgados civiles municipales de Itagüí.

Efectuada la anterior remisión, la demanda fue asignada al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, despacho judicial que también se declaró incompetente para conocer del asunto, proponiendo en consecuencia conflicto negativo de competencia, argumentando que en este caso la competencia territorial se define por el lugar de domicilio del demandado o por el lugar de cumplimiento de las obligaciones y es Medellín el lugar de domicilio de la demandada; además, *“el lugar para realizar las notificaciones a la sociedad demandada (Municipio de Medellín), aunque sabemos que no es lo mismo el lugar de notificación al lugar del domicilio, pero el lugar escogido por la parte ejecutante para presentar la demanda, es precisamente el domicilio y lugar para notificación de la parte demandada”*.

Recibido el expediente en el Tribunal, se procede a resolver de plano el conflicto suscitado entre las referidas dependencias judiciales, conforme lo manda el artículo 139 del Código General del Proceso, previas las siguientes.

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Magistratura, definir el conflicto suscitado entre el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 139 del Código General del Proceso, por tratarse esta Corporación del Superior Funcional común a las dos dependencias judiciales aludidas.

2. La necesidad de distribuir la función de administrar justicia entre distintos órganos judiciales determina la formulación de reglas legales, tendientes a satisfacerlas, y es precisamente en este punto en el cual cobra importancia el concepto **competencia**.

La noción de **competencia** viene en este sentido a integrar y concretar el amplio ámbito de atribuciones que es circunstancial a la idea de potestad

judicial; ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de determinado tipo de petición corresponde a los órganos judiciales del Estado, la regla de competencia interviene para determinar y asignar de forma específica a cuál de todos los órganos judiciales dispuestos corresponde el conocimiento de la causa. No cabe duda que la competencia guarda íntima relación con la garantía procesal de legalidad del juez y específicamente con el principio de juez natural.

Esta garantía se concreta en el establecimiento de reglas claras que permitan al justiciable conocer el sujeto que habrá de estar encargado de conocer y resolver cada uno de los tópicos materia de decisión; para ello, la competencia se asigna por normas imperativas, **contentivas de reglas de orden público e interés general que sean inmodificables, improrrogables indelegables y susceptibles de sanción ante vulneración mediante la consagración de la nulidad procesal.**

De manera que para asignar la aptitud legal para el conocimiento de un proceso determinado, el legislador acude a los denominados *factores* de competencia, dentro de los cuales se encuentran el **objetivo** que hace referencia a la naturaleza de la controversia, denominado también como competencia por materia; el **subjetivo** de acuerdo a la calidad de las personas que intervienen en la litis; el **territorial**, en virtud del que se precisa a cuál de los distintos despachos judiciales de igual categoría existentes en el territorio nacional, corresponde atender el ruego de tutela jurisdiccional; y el **funcional** que atiende a las funciones asignadas a cada Juez de la República.

3. En el asunto *sub examine* está claro que lo pretendido es promover una acción ejecutiva con fundamento en la falta de pago de las obligaciones contenidas en dos títulos valores – facturas -, y para esta clase de causas son determinantes en materia de competencia territorial dos foros o fueros; esto es, el personal o domicilio del **demandado** y el lugar de cumplimiento de la obligación, conforme lo disponen expresamente las reglas 1ª y 3ª del artículo 28 del Código General del Proceso.

Se tiene entonces que, si se presenta concurrencia en relación con los mencionados fueros del criterio territorial de competencia, corresponderá al demandante elegir entre uno u otro, en caso de que exista diferencia; sin que esté permitido al Juez o a la contraparte reprochar dicha elección.

Sobre tal asunto, se ha pronunciado en forma reciente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como sigue:

Significa, que el promotor de un contencioso con soporte en un negocio jurídico con alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, *ad libitum*, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor¹.

Ahora, el domicilio de la parte demandante servirá como determinante para fijar la competencia territorial en procesos contenciosos como el presente, **únicamente cuando el demandado carezca de domicilio y residencia en el país**, así se desprende claramente del contenido del artículo 28 numeral 1 del C.G.P. al disponer “*En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. **Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante***” (Resaltado intencional).

4. En el *sub lite* se observa que, aunque la parte demandante de forma errada afirmó que la competencia en este caso se asigna de acuerdo al domicilio de la sociedad demandante, ello no es cierto, porque se tiene conocimiento del domicilio de la demandada el cual es la ciudad de Medellín, como consta claramente en el certificado de existencia y representación legal de ASEKIM INDUSTRIA QUÍMICA S.A.S. donde se señala “*Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA*”, a lo que se agrega que precisamente la demanda fue presentada ante los juzgados civiles municipales de Medellín y, si el juez que

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de agosto de 2016. M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 11001-02-03-000-2016-02056-00

recibió inicialmente el proceso tenía dificultades o encontraba deficiencias en la información brindada en la demanda que le permitiera establecer con claridad la competencia territorial, la conducta adecuada no era el rechazo sino la inadmisión para solicitar las aclaraciones pertinentes. No obstante, se insiste, en este caso el certificado de existencia y representación legal es contundente en señalar como domicilio de la demandada la ciudad de Medellín.

Siendo así las cosas, dada la contundencia de la información obrante en el plenario y que, en el eventual caso de existir imprecisiones, la conducta adecuada no es el rechazo sino la inadmisión para esclarecer la situación, entonces el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN no ha debido desprenderse del conocimiento del presente asunto en la forma en que lo hizo, esto, al menos hasta que con mayores elementos de juicio pueda sostenerse hipótesis diferente sobre la competencia y domicilio de la demandada.

5. CONCLUSIÓN

Viene de lo dicho que la autoridad judicial competente para conocer de la demanda que encabeza estas diligencias, es el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, agencia judicial a la que se ordenará remitirlas, **sin perjuicio de que su aptitud legal pueda variar por el cuestionamiento que eventualmente realice el extremo pasivo procesal por la vía procesalmente dispuesta para ello.**

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

II. RESUELVE

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado, **DECLARANDO** que el competente para conocer del proceso referido en la motivación, es el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**, al cual se ordena remitir las presentes diligencias, una vez adquiera firmeza este auto.

SEGUNDO. PRECISAR que la competencia radicada se establece, sin perjuicio de que la aptitud legal pueda variar por el cuestionamiento que eventualmente realice el extremo pasivo procesal por la vía procesalmente dispuesta.

TERCERO. COMUNICAR la decisión adoptada al **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a52319c030e357dbea05244ca5fb3adb287ebe2f208b3bd83480908779002e6c**

Documento generado en 15/12/2023 02:25:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>